

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



**JUZGADO SEGUNDO (2º) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO  
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

Bogotá, D.C., Veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022).

<b>EXPEDIENTE</b>	<b>11001-33-35-027-2017-000111-00</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>ALVARO JOSÉ GARZÓN VALDERRAMA</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>
<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>

**CUESTIÓN PREVIA**

El artículo 155 numeral 2 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad sin atención a su cuantía.

Por otra parte, a través del Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022<sup>1</sup>, se dispuso, entre otras cosas, la creación de tres (3) juzgados administrativos transitorios en el Circuito de Bogotá cuya competencia comprende las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores públicos de la Rama Judicial y con régimen similar.

---

<sup>1</sup> «Por el cual se crean unos cargos con carácter transitorio para tribunales y juzgados a nivel nacional».

En razón de lo anterior, por medio del oficio CSJBTO22-817 del 24 de febrero de 2022 emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se estableció que al Juzgado Segundo (2º) Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá le correspondía asumir el conocimiento de los procesos originarios de los Juzgados Administrativos 19 a 30 del Circuito de Bogotá. En igual sentido, y mediante circular CSJBTC22-29 del 27 de abril de 2022, emitida por el mismo órgano mencionado en este párrafo, se dispuso que este despacho asumiera también el conocimiento de los procesos provenientes de los Juzgados Administrativos 1º, 2º, 34 y 58 del mismo Circuito.

En este orden de ideas, y en atención a los referidos parámetros de competencia, y reparto, se avocará el conocimiento del presente asunto y proferirá la decisión que en Derecho corresponda.

### **Excepciones previas**

Se observa que se contestó la demanda dentro de la oportunidad establecida para tal fin, y la demandada propuso como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario, prevista en el numeral 9º del artículo 100 del Código General del Proceso, sobre la cual se pronunciará el Despacho a continuación.

En tal sentido, se indicó que la defensa de la legalidad de los actos administrativos demandados está en cabeza del Ejecutivo, motivo por el cual, se solicitó vincular a la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Departamento Administrativo de la Función Pública (fs.92).

Aunado a lo anterior, se indica que resulta necesario la autorización presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el eventual pago de la condena que se profiera en caso de accederse a las pretensiones formuladas.

Así las cosas, este Despacho considera que no le asiste razón a la entidad demandada puesto que una cosa son las normas que dan fundamento a los actos administrativos y otra los efectos que producen dichos actos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el medio de control que se ha interpuesto es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, el pronunciamiento que se emita, en caso de accederse a las pretensiones formuladas, versaría sobre actos administrativos de carácter particular y, de ser el caso, sobre la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad frente a la norma aplicada en los actos acusados, y no sobre la legalidad en abstracto de las normas que les dieron sustento, lo cual es materia propia del medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por otra parte, la entidad o entidades competentes para defender, en sede judicial los actos demandados, en principio, son aquellas que los expiden, toda vez que son precisamente estas, las que tienen capacidad de disposición sobre aquellos, previo el cumplimiento de las respectivas normas, así como la facultad de ejecutar las acciones necesarias para darles cumplimiento, con base en los mandatos constitucionales y legales que las crean y establecen su naturaleza, competencias y funciones.

A partir de lo anterior, es evidente que la demandada cuenta con personería jurídica y está revestida de las facultades necesarias para ejercer su representación de manera autónoma, pues cuenta con la capacidad jurídica, administrativa y financiera para defender los actos administrativos que expide, motivo por el cual, no son de recibo los argumentos esgrimidos, por lo tanto, se negará la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.

Con respecto a las excepciones de caducidad (f. 88 - 90) y la denominada «incumplimiento del requisito de procedibilidad», tenemos que en Audiencia Inicial celebrada el 15 de noviembre de 2019 (fs. 177 – 178), el Juez 2° Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá de esa fecha, las declaró probadas y en consecuencia dio por terminado el proceso, decisión que fue objeto de apelación por parte del apoderado del demandante, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de providencia del 31 de agosto de 2020 (fs. 187 – 189), en la que el Alto Tribunal ordenó revocar la anterior decisión toda vez que, conforme al acervo probatorio

obrante en el expediente, ninguna de las dos excepciones planteadas se hallaba configurada y en este sentido manifestó:

*«[...] En el caso concreto está demostrado que, el demandante labora en la Fiscalía General de la Nación desde **15 de junio de 1994** siendo el último cargo desempeñado el de Fiscal Delegado ante jueces, y al 4 de mayo de 2018, fecha en que se expide certificación del tiempo de servicios, se encontraba vinculado con la entidad<sup>2</sup>, es decir, que para el momento de presentación de la demanda – 22 de julio de 2015 – el demandante se encontraba en estado activo en la Fiscalía General de la Nación, lo que implica que el vínculo laboral del demandante estaba vigente, por lo que se reitera lo señalado la norma precedente, esto es, que los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, siempre que la periodicidad o retribución se encuentre vigente» (f. 188 vuelto)*

De otra parte, el Alto Tribunal señaló que, no es exigible agotar el requisito de conciliación prejudicial, en tratándose de derechos ciertos e irrenunciables como el del presente asunto<sup>3</sup> (f. 189).

En relación con las demás excepciones propuestas en la contestación de la demanda (fs. 88 – 91), se resolverán en la correspondiente sentencia puesto que dichas excepciones se oponen a las pretensiones formuladas.

#### **Procedencia de la sentencia anticipada:**

El Despacho considera que en el caso bajo consideración se cumplen los requisitos previstos en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo<sup>4</sup> para dictar sentencia

---

<sup>2</sup> F. 148

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Segunda, sentencia del 2 de agosto de 2012, Radicado interno 099112, CP. Gerardo Arenas Monsalve.

<sup>4</sup> «...Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;  
b) Cuando no haya que practicar pruebas;

anticipada, por lo que no resulta necesario celebrar audiencia inicial y se prescindirá de esta toda vez que:

1. El objeto del presente asunto es de puro Derecho.
2. No se requiere el decreto ni la práctica de pruebas.

### **Decreto de pruebas**

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 173 del Código General del Proceso<sup>5</sup>, por cumplirse con los presupuestos de pertinencia<sup>6</sup>, conducencia<sup>7</sup>, y utilidad, se tendrá como prueba la documentación aportada por las partes.

Lo anterior, sin dejar de lado que el apoderado de la entidad demandada indicó que se deben tener en cuenta los antecedentes administrativos adjuntos con el escrito de la demanda. En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo ordenado en el auto admisorio de la demanda del 30 de junio de 2017, referente a allegar al plenario el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación acusada y que se encuentren en poder de la demandada y el oficio con radicado N°20185640034991 del 8 de mayo de 2018 (f. 147), según el cual, los siguientes documentos faltantes por aportar serían allegados una vez fueran localizados (f. 147 vuelto), esto es, la petición radicada el 13 de julio de 2007, respuesta al derecho de petición con su respectiva notificación, oficio DSAFB-2-009071 de julio de 2007 expedido por la Directora Administrativa y Financiera de

---

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas; con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles».

<sup>5</sup> «...Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente».

<sup>6</sup> Para este Juzgado la pertinencia hace alusión a la relación que tiene lo que se pretende demostrar con el medio probatorio que se tiene.

<sup>7</sup> El Despacho entiende por conducencia la aptitud que la ley le da a un medio probatorio para que con este se pueda demostrar un hecho.

la Fiscalía General de la Nación; lo que a la fecha no se ha realizado, en consecuencia se requerirá a la demandada una vez más, para que los aporte.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que tales documentos han sido tenidos en cuenta como pruebas por la entidad demandada (f. 74) y su existencia y valor probatorio no ha sido refutado, en tal sentido, se tendrán como pruebas lo siguiente:

- ✓ Petición del 13 de julio de 2007 mediante la cual se solicitó el reconocimiento y pago del 30% equivalente a la PRIMA ESPECIAL, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como remuneración con carácter salarial y su incidencia en la liquidación de las prestaciones sociales, incluidas cesantías.
- ✓ Oficio DSAFB-2-009071 del 16 de julio de 2007 por medio de la cual se negó la anterior petición.
- ✓ Oficio DSAFB- 23-010047 del 16 de agosto del 2007, mediante el cual se da respuesta al recurso de reposición interpuesto (f. 26).
- ✓ Resolución N° 2-2928 del 6 de diciembre de 2007, a través del cual se resuelve el recurso de apelación, expedida por la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación (fs. 27 – 31).
- ✓ Planilla devengados y deducidos (fs. 107 – 115).
- ✓ Constancia de servicios prestados del 4 de septiembre de 2015 (f. 106)
- ✓ Certificación laboral del 4 de mayo de 2018 (f. 148).
- ✓ Extracto de Hoja de vida (fs. 154 – 156).
- ✓ Planilla de devengados y deducidos del 7 de mayo de 2018 (fs. 157 – 164).

### **Fijación del litigio**

Teniendo en cuenta la demanda, su contestación, y el material probatorio aportado, se procederá a fijar el litigio de la siguiente manera:

#### **Situación fáctica:**

**1°** El demandante prestó sus servicios a la entidad demandada desde el 15 de julio de 1994.

**2°** Mediante petición del **petición del 13 de julio de 2007**, el actor solicitó el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como remuneración con carácter salarial y su incidencia en las prestaciones sociales incluidas las cesantías e intereses a las cesantías.

**3°** Por medio del Oficio **DSAFB-2-009071 del 16 de julio de 2007**, se negó la solicitud formulada por el demandante.

**4°** Inconforme con la anterior decisión interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero fue resuelto por medio del **Oficio DSAFB-010047 del 16 de agosto del 2007**, mediante el cual se da respuesta al recurso de reposición interpuesto confirmando la anterior decisión y se concede el recurso de apelación (f. 26), este último fue resuelto por medio de la **Resolución 2-2928 del 6 de diciembre de 2007**, expedida por la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, el cual confirma en todas sus partes el acto administrativo recurrido (fs. 27 – 31).

En este orden de ideas, el Despacho considera que el **problema jurídico** se contrae a determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la PRIMA ESPECIAL del 30%, como remuneración con carácter salarial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales con la inclusión de la mencionada prima, incluidas las cesantías.

De igual manera, en caso de verificarse la procedencia de las pretensiones formuladas, se analizará si en el caso bajo consideración surge el fenómeno jurídico de prescripción trienal.

Así las cosas, en virtud del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo<sup>8</sup>, una vez en firme las anteriores decisiones (pronunciamiento sobre las excepciones previas, decreto de pruebas y fijación del litigio), se concederá a las partes el término de diez (10) días para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rinda el concepto que estime pertinente.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO (2º) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: AVOCAR** el conocimiento del presente asunto, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO: NEGAR** la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario, por los argumentos señalados en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: DAR** aplicación al trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en razón de lo expuesto en este auto.

**CUARTO: DECRETAR** como pruebas la documentación indicada en esta providencia.

**QUINTO: REQUERIR** a la entidad demandada para que allegue con el escrito de alegatos la documentación pendiente por aportar y que fue ordenada en el auto admisorio de la demanda del 30 de junio de 2017 conforme la parte motiva de esta providencia.

---

<sup>8</sup> «Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito»



**SEXTO: FIJAR** el litigio dentro del presente asunto, en los términos indicados en este proveído.

**SÉPTIMO:** Una vez en firme las anteriores decisiones, **CONCEDER** a las partes el término de diez (10) días para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rinda el concepto que estime pertinente.

**OCTAVO: ADVIÉRTASELE** a las partes que deberán allegar todas las comunicaciones y documentos que pretendan hacer valer dentro del caso bajo consideración únicamente a la siguiente dirección de correo electrónico: [correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co).

De igual manera, deberán atender los parámetros previstos en el artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de la sanción allí prevista.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado Por:

Francisco Julio Taborda Ocampo  
Juez  
Juzgado Administrativo  
002 Transitorio  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9f6615869a2a59ed8005906dc22dab4175a6ced82e68dad4372f2c0593f45757**

Documento generado en 18/06/2022 12:14:48 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**